

## TEMAS DE ACTUALIDAD

# IMPACTO Y RESPUESTA DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL A LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Tema de actualidad coordinado por **José Luis Monzón Campos**, Director de la revista 'Noticias del CIDE' y director de CIRIEC-España

## Introducción: Pasó la DANA por Valencia, Capital de la Economía Social, más que nunca, solidaria

En febrero de 2024 la ciudad de Valencia fue declarada Capital Española de la Economía Social por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Consejo Estatal para el Fomento de la Economía Social, a partir de la candidatura promovida por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, a petición de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.

Valencia vivió esta capitalidad marcada por dos tragedias que han conmovido a nuestra sociedad: el devastador incendio del barrio de Campanar, en Valencia, ocurrido el 22 de febrero de 2024, y la DANA que afectó a su provincia el 29 de octubre del mismo año, con las terribles secuelas de tantas vidas destrozadas, de miles y miles de ilusiones rotas y de proyectos hundidos tras toda una vida de anhelos personales y esfuerzos colectivos.

En este escenario de adversidades, la economía social valenciana fue puesta a prueba, demostrando su vitalidad y su extraordinaria capacidad para hacer frente a los desafíos.

Desde el primer momento de la catastrófica DANA, el cooperativismo, el mutualismo y el tercer sector de acción social se volcaron en las ayudas a las poblaciones afectadas. Cooperativas como ANECOOP, CONSUM, FLORIDA UNIVERSITARIA, CAIXA POPULAR, GRUPO CAJA RURAL, GRUPO CAJAMAR y muchas otras, facilitaron desde primera hora alimentos e instalaciones y, en el caso de las cooperativas de crédito, destinaron

ayudas directas por varios millones de euros. La mutua DIVINA SEGUROS creó un fondo de apoyo y ayudas directas por importe de 4 millones de euros y donó un millar de hidrolimpiadoras a 13 municipios y 2 pedanías afectados por la DANA.

En el tercer sector de acción social, CRUZ ROJA, CARITAS, GRUPO SOCIAL ONCE, MENSAJEROS DE LA PAZ, CERMI y la PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO (todos ellos integrados en la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social) reaccionaron a la catástrofe de manera intensa y solidaria. Las imágenes de más de 50.000 personas voluntarias desplazadas a la zona “cero” de la DANA, dieron la vuelta al mundo y permanecerán para siempre en el imaginario colectivo.

En la Universitat de València, desde el IUDESCOOP y el CIRIEC-España, se reaccionó con rapidez y en la primera semana de noviembre ya se disponía de un completo informe sobre el impacto de la DANA en las cooperativas afectadas, elaborado conjuntamente por el Portal Estadístico de la Economía Social Valenciana (VALESTAT) y CONCOVAL.

Esta vibrante respuesta de la economía social a la catástrofe de la DANA no ha sido fruto de la casualidad. Responde a la profunda tradición cooperativista, asociativa y mutualista de la sociedad valenciana, más que centenaria, y que en la actualidad se expresa con más de 10.000 empresas y entidades, 13.000 millones de euros de cifra de negocios, 100.000 empleos retribuidos, 500.000 voluntarios y un tejido asociativo integrado por más de 3 millones de personas.

Pero, con ser elocuentes de por sí estos datos, la fuerza e importancia de la economía social radica en

Desde el primer momento de la catastrófica DANA, el cooperativismo, el mutualismo y el tercer sector de acción social se volcaron en las ayudas a las poblaciones afectadas.

Una vibrante respuesta de la economía social, que no es fruto de la casualidad. Responde a la profunda tradición cooperativista, asociativa y mutualista de la sociedad valenciana, más que centenaria.

los valores que la definen, y que la configuran como un pilar imprescindible para un desarrollo sostenible e inclusivo. Son valores que se inspiran en la cultura del trabajo, la participación democrática y la solidaridad, en la cooperación y en la subordinación del capital a la satisfacción de las necesidades humanas.

Estos son los valores que vertebran los compromisos de la economía social con la sociedad valenciana ante los retos y amenazas del cambio climático, las guerras, las desigualdades, la exclusión social y el racismo, el desempleo, el trabajo precario, el expolio de los agricultores y las crisis pandémicas.

Frente a estos desafíos, la economía social ha demostrado, una vez más, sus compromisos con la sociedad valenciana:

- Compromiso con el empleo decente, impulsando y consolidando iniciativas de emprendimiento colectivo mediante proyectos empresariales cooperativos, solidarios, participativos y competitivos. Como los que ya existen y constituyen una historia de éxitos de democracia económica y estabilidad en el empleo en los ámbitos de la enseñanza, la distribución comercial, el crédito, la industria, la construcción y los servicios.

- Compromiso con el desarrollo en el medio agrario y rural a través del asociacionismo cooperativo, racionalizando la producción, internalizando la generación de valores añadidos y creando nuevas fuentes de riqueza. La agricultura, más que ninguna otra actividad, es patrimonio y símbolo de la forma de ser y de hacer de nuestro pueblo y, por ello, la economía social tiene la legítima satisfacción de haber desarrollado en su seno actividades empresariales con un liderazgo consolidado.

- Compromiso con las personas mayores mediante proyectos que atienden sus necesidades a través de una economía social de los cuidados que dignifica y humaniza la longevidad.

- Compromiso con las personas más vulnerables mediante la acción e impulso de un fuerte tejido asociativo, capaz de integrarlas en un proyecto social común, de toda la ciudadanía.

- Compromiso con la economía del conocimiento y la investigación a través de las redes de investigación de las universidades y centros de investigación valencianos de economía social, que constituyen una referencia internacional de primer nivel.

- Compromiso por una transición ecológica justa, por la protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo humano sostenible, entendido este como el que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para atender a sus propias necesidades.

Estos compromisos, inequívocamente asumidos por la economía social valenciana, confieren a ésta una clara dimensión de servicio público, que emplaza a las administraciones públicas para asumir las potencialidades de la economía social, estimulando sus iniciativas de emprendimiento, removiendo los obstáculos que se oponen a su desarrollo y estableciendo compromisos recíprocos con los actores de la economía social, que permitan la consecución de objetivos de interés general.

Objetivos de interés general que las empresas y entidades de la economía social han asumido como propios. Objetivos complejos, pero necesarios, si se quiere asegurar una senda de progreso y bienestar para nuestro pueblo. Y objetivos posibles, si los diferentes sectores sociales y económicos y las administraciones públicas los asumen como propios y se comprometen solidariamente en su consecución.

Como universitarios y como ciudadanos, todos los hombres y mujeres que formamos parte del CIRIEC-España y del IUDESCOOP nos sentimos profundamente orgullosos de la economía social, de las empresas y organizaciones que la integran, de su respuesta, enérgica y solidaria, a la catastrófica DANA que asoló nuestras comarcas.

**José Luis Monzón**

Director de Noticias del CIDEA

Director de CIRIEC-España

## IMPACTO DE LA DANA EN LAS COOPERATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. INFORME CIRIEC-VALESTAT-CONCOVAL

Las cooperativas de la provincia de Valencia tienen una fuerte implantación en los territorios más dañados por la DANA. En cifras globales, las 477 cooperativas radicadas en los municipios afectados representan el 30% de las cooperativas de la provincia y el 17,5% de las cooperativas en la Comunitat Valenciana. Estas 477 cooperativas dan empleo a cerca de 11.000 trabajadores y servicio a más de 65.000 usuarios; sus ventas anuales agregadas ascienden a 1.527 millones de euros y aportan 286 millones de euros al PIB valenciano.

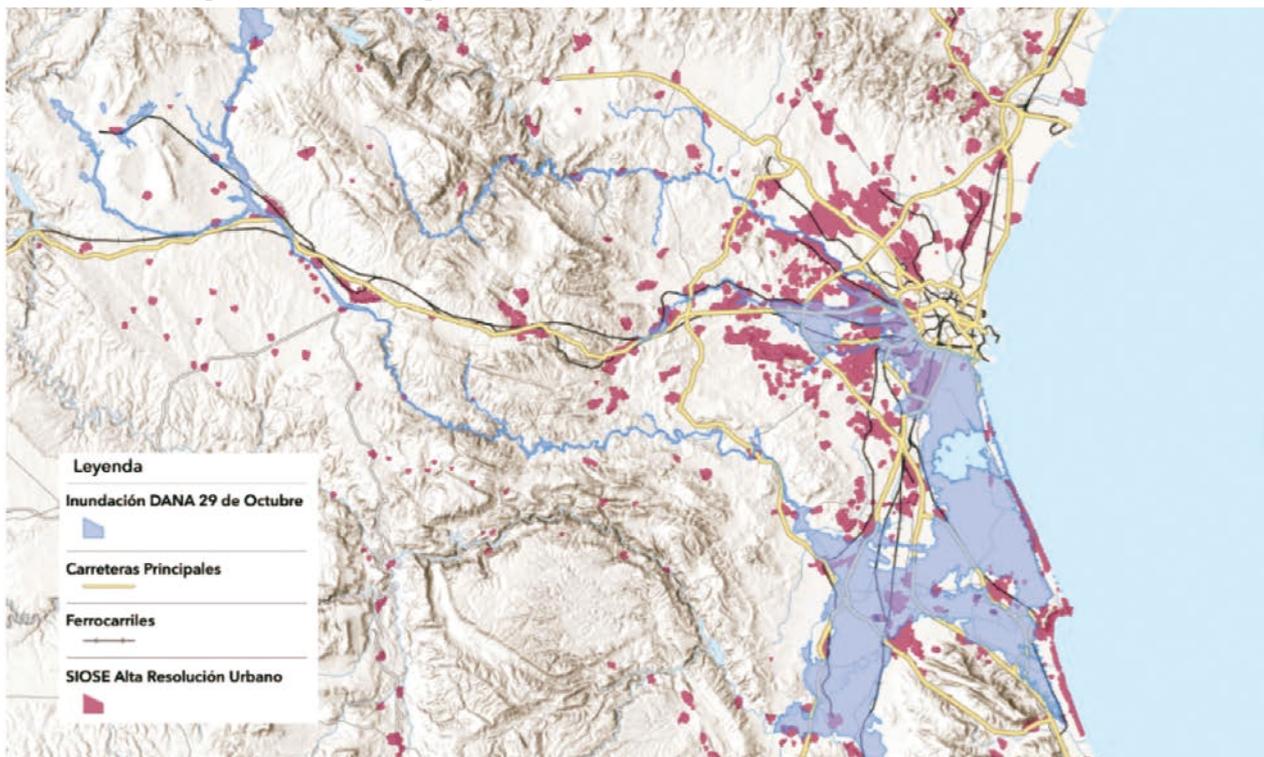
La catástrofe provocada por la DANA en la provincia de Valencia afectó por tanto a la actividad de un número significativo de cooperativas, así como a sus trabajadores, socios y usuarios. Un informe de urgencia elaborado por CIRIEC, VALESTAT y CONCOVAL pudo aproximar algunas cifras generales del impacto socioeconómico provocado por este fenómeno.

Así, de las 1.564 cooperativas activas en la provincia en la actualidad, los efectos de la DANA han afectado a un total de 477 entidades que se encuentran repartidas por los 65 municipios afectados. Sin embargo, no todas ellas se han visto igualmente afectadas. En los municipios más dañados, aquellos que se consideran

“zona 0” (Aldaia, Alfajar, Benetússer, Catarroja, Chiva, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Silla y Utiel) hay activas un total de 72 cooperativas con un empleo directo de 1.089 trabajadores (excluyendo a Consum, con sede en Silla, que tiene más de 20.000 trabajadores repartidos por numerosos centros de trabajo, dentro y fuera de la zona afectada), que generan unas ventas de 114,2 millones de euros (de nuevo, excluyendo a Consum).

La afectación en el resto de municipios es muy desigual. Por poner un ejemplo, el municipio de Torrent ha sido parcialmente afectado por la DANA, por lo que solamente se han visto afectadas las instalaciones de aquellas cooperativas cerca de las zonas inundadas, básicamente las agrícolas e industriales (con sede en el polígono industrial del Mas del Judge); mientras que un número significativo de cooperativas de servicios no han visto comprometida la continuidad de su actividad en el corto y medio plazo. Así, cooperativas de enseñanza (El Drac), financieras (Caixa Rural de Torrent) o comerciales (Torrent wagen, Dietaser, etc.), aunque se vieron afectadas momentáneamente por el evento meteorológico, volvieron rápidamente a la actividad.

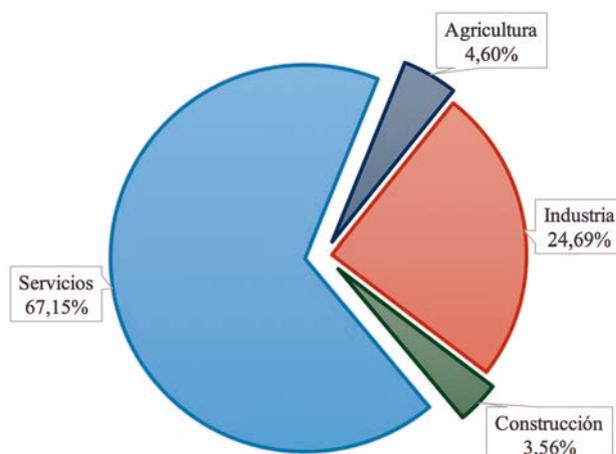
### Zonas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia



**Tabla 1. Número de cooperativas en los municipios de la “zona 0”**

| Municipio    | Cooperativas |
|--------------|--------------|
| Aldaia       | 10           |
| Alfajar      | 3            |
| Benetússer   | 5            |
| Catarroja    | 15           |
| Chiva        | 3            |
| Massanassa   | 5            |
| Paiporta     | 7            |
| Picanya      | 5            |
| Sedaví       | 2            |
| Silla        | 5            |
| Utiel        | 12           |
| <b>Total</b> | <b>72</b>    |

Fuente: Registro de Cooperativas Comunitat Valenciana.

**Gráfico 1. Cooperativas en municipios afectados por sectores de actividad**


Fuente: Registro de Cooperativas Comunitat Valenciana.

**Tabla 2. Cooperativas en municipios afectados, por clase de cooperativa**

| Clase de cooperativa   | Número     | %           |
|--|------------|-------------|
| TRABAJO ASOCIADO   | 307        | 64,4%       |
| VIVIENDAS  | 13         | 2,7%        |
| POLIVALENTE- PRINCIPALMENTE AGRARIA                          | 4          | 0,8%        |
| AGROALIMENTARIAS   | 94         | 19,7%       |
| CRÉDITO  | 7          | 1,5%        |
| CONSUMO  | 8          | 1,7%        |
| TRANSPORTES DE SERVICIOS                                     | 4          | 0,8%        |
| INTEGRACION SOCIAL DE CONSUMO                                | 1          | 0,2%        |
| SEGUNDO GRADO  | 5          | 1,1%        |
| SERVICIOS  | 5          | 1,1%        |
| TRANSPORTES DE TRABAJO ASOCIADO                              | 16         | 3,4%        |
| EXPLOTACIÓN COMUNITARIA DE LA TIERRA                         | 2          | 0,4%        |
| ENSEÑANZA DE TRABAJO ASOCIADO                                | 2          | 0,4%        |
| POLIVALENTE CONSUMO, TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS EMP.Y PROF | 1          | 0,2%        |
| TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL                                 | 5          | 1,1%        |
| ENSEÑANZA DE ENSEÑANZA MIXTA                                 | 1          | 0,2%        |
| INTEGRACION SOCIAL DE TRABAJO ASOCIADO                       | 1          | 0,2%        |
| POLIVALENTE CONSUMO CON SOC.TRABAJADORES                     | 1          | 0,2%        |
| <b>Total</b>   | <b>477</b> | <b>100%</b> |

## Impacto de la DANA en las cooperativas por sectores

### Oficinas de cajas rurales y cooperativas de crédito

El sector del crédito cooperativo sufrió daños en oficinas de entidades como Caixa Popular, con 29 oficinas en zonas afectadas, la oficina de Caja Rural Albal, las seis de Caixa Rural Algemés, las cinco de Caixa Rural l'Alcudia y más de 50 oficinas del Grupo Cooperativo Cajamar.

### Impacto en cooperativas eléctricas

Fueron afectadas cooperativas eléctricas, comunidades energéticas, instalaciones solares y otras de energía renovable en Castellar, Guadassuar, Catarroja, Alginet, Chera y Sot de Chera, entre otras.

En las poblaciones de Chera y Sot de Chera los daños fueron muy importantes en la infraestructura, ya que sus instalaciones están cerca de ríos y barrancos, lo que provocó que tuvieran que funcionar con grupos electrógenos, con un coste elevadísimo.

### Daños en la industria y el transporte cooperativos

En el sector de transporte por carretera, alrededor de 1.000 camiones sufrieron importantes daños, todos ellos pertenecientes tanto a transportistas residentes en las zonas afectadas como del resto de España.

Las cooperativas de transportistas perdieron numerosos vehículos y tuvieron daños en hangares, surtidores y despachos. Asimismo, se vieron afectadas cooperativas de taxistas, de reparto y vehículos industriales en polígonos y comercios.

### Afectaciones en la distribución alimentaria

La cooperativa Consum sufrió daños en 70 supermercados entre propios y franquiciados, afectando a 1.000 personas de sus tiendas. Además, sufrió saqueos también en varios de los supermercados en zonas afectadas.

### Sector agroalimentario: Daños principales en cítricos, Kaki y arroz

Se estima que fueron 25.000 las hectáreas de cultivo afectadas. Hubo cuantiosos daños en caminos rurales, con desprendimientos y desmontes provocados por las aguas, así como daños en puentes y otras vías de comunicación. Daños en almacenes e industrias en las cooperativas de l'Alcúdia, Carlet, Massalavés, Alfarp y Llombai, así como en Massanassa.

Respecto de las cosechas, se produjeron graves daños en cítricos, kaki y arroz. En Massanassa y El Palmar el agua entró en los almacenes de las cooperativas donde de los 7 millones de kilos de arroz que tenían almacenados y acondicionándose perdieron

aproximadamente 2 millones. Los arrozales se vieron dañados también por los residuos arrastrados en las riadas.

La campaña de cítricos sufrió graves daños como consecuencia de la afectación de muchos de los árboles frutales por la humedad y la consiguiente asfixia radical o enfermedades de raíz. También se destruyeron casetas de riego, sistemas de riego por goteo, aperos, almacenes y naves agrícolas, con pérdidas cuantiosas. La Hoya de Buñol, la Ribera Alta, la Ribera Baja o l'Horta Sud son comarcas con mucha superficie de cítricos, por lo que la oferta y comercialización se vieron gravemente mermadas.

### Enseñanza

El cooperativismo de enseñanza en la Comunitat Valenciana por su origen tiene gran parte de sus instalaciones en las zonas afectadas, principalmente en l'Horta sud donde se concentra gran parte del alumnado. Hubo pérdidas en instalaciones (aulas, muros, puertas, zonas deportivas y patios), mobiliario y materiales en escuelas cooperativas afectadas en las zonas devastadas.

Fueron muy afectadas cooperativas como Florida Grup Educatiu en sus diferentes centros y especialmente en Catarroja, Ninos, La Gavina o Colegio Larrodé entre otras. Ninos escuelas de 0 a 3 años sufrió graves daños en Alfafar, Picanya, Chiva y Albal, con dos instalaciones totalmente destruidas. La Gavina en Picanya y Larrodé en Catarroja tuvieron muy afectadas sus instalaciones.

### Profesionales, pymes y comercios en cooperativas de trabajo asociado

El 20% de las cooperativas de trabajo asociado perdió todas sus instalaciones: pymes y micropymes en comercios como bares, despachos, talleres, peluquerías, etc. Pequeñas empresas sufrieron importantes daños colaterales con pérdida de negocio, algunas de ellas como la cooperativa Asterisco, dedicada al teatro y a actividades culturales, que desarrolla su actividad en el Teatro Auditorio de Aldaia.

Otras empresas más grandes, como Serveis Futurs, con 100 auxiliares de limpieza, vio cómo sus instalaciones quedaron totalmente destruidas. Por último, otras cooperativas que trabajan por la integración de colectivos desfavorecidos, como la cooperativa Plataforma de Iniciativas Sociales en Alfafar, sufrieron también graves daños.

### Cooperativas de vivienda

Las viviendas ubicadas en las zonas inundadas se estiman en decenas de miles, una parte de las cuales proceden de viviendas cooperativas.

## LA SOLIDARIDAD COOPERATIVA FRENTE A LA DANA

por **Emilio Sampedro Baixauli**

**Presidente de Concoval (Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana)**

477 Cooperativas valencianas tienen la sede en los municipios afectados por la dana. Y algunas de ellas con muchos establecimientos abiertos al público en las zonas afectadas: Consum, 69; Grupo Cajamar, 30; Coinfer, 11; Caja Popular, 10.

La barrancada impactó en un territorio muy cooperativizado. Las comarcas más castigadas (L'Horta, La Ribera, Utiel-Requena, Camp del Turia...) son intensivas en cooperativismo. Más de un 30 % de las cooperativas de la provincia de Valencia y un 17,5 % de las del conjunto de la Comunidad están concentradas en los municipios afectados. Casi 11.000 personas trabajando en cooperativas en las zonas siniestradas y más de 65.000 usuarios afectados. De una manera muy breve, y sin entrar en detalles, ese fue el impacto.

Pero es importante comprender, también, que más de la mitad de la población valenciana es cooperativista. Y esto significa que, cuando pasa algo en València, las cooperativas nos sentimos interpeladas. Y la dana que nos asoló el 29 de octubre del año pasado, además de provocar cuantiosas pérdidas en nuestras empresas, fue -sobre todo- una catástrofe que violentó la vida de nuestra gente. Tengamos presente que las cooperativas no somos empresas como las demás: las cooperativas somos empresas que reunimos personas y, a partir de ahí, empezamos a "hacer economía"; no al revés.

Por eso, desde la misma noche del 29 de octubre las cooperativas reaccionaron para hacer frente a la situación de emergencia. En colaboración con autoridades locales y ONG, se hicieron llegar agua, alimentos, material de ferretería, de limpieza y productos de todo tipo.

Personalmente, recuerdo haber hablado en menos de 24 horas con más de veinte cooperativas, grandes y pequeñas, de todas las clases, de toda condición. La respuesta, en todos los casos -absolutamente en todos los casos- fue extraordinaria y conmovedora. Y mi experiencia personal es solo un botón de muestra.

En aquellos días que siguieron a la fatídica noche, cada cual estaba "sacando su barro", unos con escobas y palas, otros con el teléfono móvil, otros al volante de un coche, de una furgoneta, de un camión o de un tractor... De mil maneras:

- Ayudando a limpiar, claro.
- Reparando daños en edificios y aportando bombas de agua (sabemos que lo hicieron, por ejemplo, Azulejo, Eklekte y Creaqció).
- Alojando personas afectadas.
- Repartiendo medicamentos: las cooperativas de farmacéuticos reforzaron rutas y stock para abastecer a las farmacias de las zonas siniestradas.
- Proporcionando internet gratuito que facilitó la comunicación en zonas damnificadas. Lo hizo la cooperativa eléctrica de Alginet.
- Muchas escuelas recogieron recursos educativos y juegos para espacios lúdicos infantiles o crearon comedores solidarios: Escuela 2, El Drac, Marçais...

Incluso, sobre el terreno, las cooperativas, estando afectadas, estaban también ayudando en su entorno al mismo tiempo:

- Proporcionaron electricidad en localidades que habían perdido el suministro (lo hicieron las cooperativas eléctricas de Sot de Chera y de Chera).
- Facilitaron maquinaria agrícola para colaborar en la evacuación y limpieza de las calles (muchos agricultores, socios de cooperativas de la Ribera, L'Horta y Utiel-Requena, salieron a la calle).
- Otras cooperativas pusieron sus instalaciones a disposición de las Administraciones para facilitar la prestación de servicios públicos sanitarios, de acogida y veterinarios (lo hizo Florida, en Catarroja, que estaba absolutamente arrasada).
- O se convirtieron en base para la recepción y distribución de productos que se repartían después por la zona. La gente de La Ribera recordará en qué se convirtió Copal durante aquellos días; y es solo uno

"La respuesta cooperativa frente a la dana fue rápida, solidaria y activa. Y eso queremos ponerlo en valor: No solo hay que contar cómo sufrimos las cooperativas los devastadores efectos de la catástrofe, sino también nuestra capacidad de recuperación y nuestra solidaridad".

"Que nos sirva para compartir el orgullo de ser cooperativistas: para recordar por qué nos hicimos cooperativistas y por qué seguimos siéndolo".

de los casos. Cooperativas pequeñas como por ejemplo Makea, en La Punta, o Factoria d'Idees i Creació, en Alginet, también cedieron sus locales como punto logístico intermedio.

Además, algunas cooperativas singulares, las más grandes y potentes, como Anecoop, Consum, Coarval, Coinfer o Grupo Sorolla, han sido un modelo de extraordinaria generosidad, recaudando fondos para ayudar a cooperativas dañadas y compensando a sus trabajadores y familiares afectados con importantes sumas económicas (que fueron aportadas por la propia cooperativa, pero también por cooperativistas no afectados en favor de sus compañeros y compañeras damnificados). Gracias a Consum, por ejemplo, las residencias de personas mayores, menores y con discapacidad, recibieron diariamente, desde el primer día, alimentos y agua. Y Anecoop, por su parte, en coordinación con Concoval, repartió una importante suma de dinero entre pequeñas cooperativas afectadas.

Y las cooperativas de crédito (que conviene recordar que son las únicas entidades financieras con capital 100% valenciano que nos quedan) dispusieron rápidamente líneas de financiación sin intereses ni comisiones. Lo hicieron Caixa Popular, las cooperativas del Grupo Cajamar y las cajas rurales de pueblos afectados, como la de Albal o Algemesí.

En el plano más institucional, Cepes y Concoval impulsamos la creación de un fondo para ayudar en la recuperación de empresas de economía social afectadas; un fondo que ha recibido donaciones de cooperativas valencianas y otras comunidades autónomas como Cataluña, Euskadi y Madrid. Y tenemos que re-

conocer que este fondo se constituyó por iniciativa de los compañeros cooperativistas de fuera de València, que inmediatamente nos llamaron para decirnos que querían ayudar a las cooperativas valencianas.

Sin salirnos del ámbito estatal, también desde la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) se constituyó un fondo para la reconstrucción de las cooperativas educativas más dañadas.

En suma, la economía social española y valenciana han recaudado y repartido, específicamente entre empresas cooperativas y entidades de economía social afectadas, alrededor de 500.000 euros. Y todo esto, por supuesto, al margen de las acciones de voluntariado de nuestra gente y de las ayudas que muchas cooperativas concedieron a sus trabajadores afectados y de las donaciones que se hicieron, en dinero y en especie, para el apoyo a la acción desarrollada sobre el terreno por las ONG. Eso fueron millones.

La respuesta cooperativa frente a la dana fue rápida, solidaria y activa. Y eso queremos ponerlo en valor: No solo hay que contar cómo sufrimos las cooperativas los devastadores efectos de la catástrofe, sino también nuestra capacidad de recuperación y nuestra solidaridad. Y que nos sirva para compartir el orgullo de ser cooperativistas: para recordar por qué nos hicimos cooperativistas y por qué seguimos siéndolo. La respuesta es, entre otras cosas, porque las cooperativas nunca miramos hacia otro lado.

## RECONSTRUIR DESDE LO COMÚN: ALIANZAS PÚBLICO-SOCIALES PARA UNA RECUPERACIÓN JUSTA TRAS LA DANA

por **María José Vañó Vañó**  
**Profesora de Derecho Mercantil, Universitat de València**  
**Investigadora de IUDESCOOP**

La catástrofe climática ocasionada por la DANA ha puesto de relieve la necesidad urgente de repensar los modelos de reconstrucción y respuesta local desde marcos jurídicos que prioricen el interés general, la cohesión social y la sostenibilidad. En este contexto, la economía social no solo representa una alternativa organizativa eficaz, sino una vía plenamente habilitada por el derecho vigente para colaborar con las administraciones públicas en la provisión de servicios esenciales. Este planteamiento cuenta con fundamento legal expreso en el ordenamiento autonómico y estatal.

En primer lugar, la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, modificada por la Ley 2/2023, de 30 de marzo, incorpora en su artículo 99 bis una regulación específica de las cooperativas de iniciativa social prestadoras de servicios de interés económico general. El precepto establece que estas cooperativas pueden desarrollar actividades vinculadas a servicios básicos —como vivienda, energía, salud, dependencia o movilidad— en beneficio de la colectividad y en régimen de continuidad.

De manera relevante, el apartado 4 del artículo 99 bis establece:

“Cuando no proceda la relación contractual amparada en la legislación de contratos del sector público entre la Administración y la cooperativa de iniciativa social, la relación entre ambas partes se formalizará en un convenio de colaboración que establezca de forma objetiva las obligaciones de servicio público impuestas y los mecanismos de control en cuanto a las mismas que se reserva la entidad local.”

Esta previsión permite, con pleno respaldo legal, la suscripción de convenios de colaboración entre cooperativas de iniciativa social y entidades locales, fuera del marco típico de la contratación pública, siempre que exista una finalidad de interés general y se establezca el control público correspondiente. La norma introduce así una vía complementaria al procedimiento contractual, adaptada a la naturaleza no lucrativa y orientada al servicio público de estas entidades.

A nivel estatal, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, define a las cooperativas como parte integrante de un conjunto de entidades que, desde la iniciativa privada, persiguen el interés general económico o social. Esta ley reconoce expresamente su contribución al desarrollo territorial, la inclusión y la equidad, y llama a las administraciones públicas a su fomento.

Además, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, permite incorporar a entidades de la economía social en procesos de contratación pública mediante fórmulas como:

- La reserva de contratos a entidades sin ánimo de lucro, cooperativas de iniciativa social y empresas sociales (art. 77).
- La introducción de criterios sociales y medioambientales en los pliegos y adjudicaciones (arts. 1.3, 35 y 145).
- La firma de convenios de colaboración cuando no proceda el contrato administrativo, en aplicación de lo previsto en la disposición adicional octava y el artículo 47.

En consecuencia, reconstruir desde la economía social no solo es viable jurídica y técnicamente: es una opción contemplada expresamente en la normativa vigente, tanto a nivel autonómico como estatal. La utilización de convenios de colaboración con cooperativas de iniciativa social permite una actuación legal, transparente y orientada al interés público, especialmente adecuada en contextos donde la urgencia, la cercanía territorial y la finalidad social exigen fórmulas flexibles y responsables.

Lejos de ser una solución informal o marginal, esta forma de colaboración público-social es una herramienta legítima y regulada, que permite afrontar la reconstrucción desde estructuras democráticas, participativas y con arraigo comunitario, dando cumplimiento a los principios constitucionales de eficacia, solidaridad, subsidiariedad y participación.

Este marco jurídico sirvió de base y horizonte para la jornada celebrada el 25 de marzo de 2025 en la

Universitat de València, donde administraciones públicas, entidades de la economía social, responsables municipales, cooperativas, fundaciones y plataformas ciudadanas se reunieron para compartir experiencias, formular propuestas y reivindicar el reconocimiento operativo de estas herramientas legales en los procesos de reconstrucción. Lo que siguió no fue una simple exposición de buenas prácticas, sino una deliberación colectiva sobre cómo activar, desde lo jurídico y lo comunitario, una recuperación transformadora y justa.

La apertura de la jornada evidenció que el marco jurídico que habilita la colaboración público-social empieza a encontrar eco en el discurso institucional. El acto fue inaugurado por Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quien subrayó la necesidad de que la reconstrucción post-DANA se fundamente en estructuras económicas más justas, sostenibles y participativas. Hizo referencia directa a los fondos movilizados desde el Estado en materia de agricultura, vivienda y tercer sector, y reconoció expresamente el valor de la economía social como “motor de resiliencia y proximidad”.

Zulima Pérez, asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial, reivindicó el papel de las entidades locales en la gestión de la emergencia y vinculó la reconstrucción al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial mención al ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y al ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos). Pérez situó la economía social como aliada natural de los poderes públicos en estos procesos, destacando la necesidad de dotar a los ayuntamientos de instrumentos normativos que faciliten estas alianzas.

Andrés Lluch, director general de Ocupación, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana, reafirmó el compromiso institucional con la reconstrucción post-DANA, destacando el papel esencial de la economía social como motor de recuperación territorial. Subrayó que las cooperativas valencianas, cerca de 500 presentes en la zona afectada, han demostrado capacidad de reacción y arraigo. Apeló a la necesidad de liderar desde lo público una reconstrucción sostenible y coordinada, con la economía social como aliada natural, y anunció la aprobación reciente del Plan Estratégico de Reconstrucción, estructurado en siete ejes y más de cincuenta medidas. Aunque no entró en detalles normativos, insistió en la necesidad de modelos que integren empleo, sostenibilidad e innovación con fuerte componente territorial.

Desde el ámbito universitario, intervinieron también Clara Viana, decana de la Facultad de Derecho, y Francisco Muñoz, decano de la Facultad de Economía, quienes expresaron el compromiso de sus centros con

la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en materia de economía social, y valoraron el trabajo conjunto entre universidad, administración y tejido cooperativo como modelo de gobernanza a consolidar.

### **Gobiernos locales frente a la DANA: límites normativos, respuestas comunitarias y demandas de reforma**

Esta primera mesa institucional marcó el tono del resto de la jornada: no se trataba de teorizar sobre modelos alternativos, sino de activar los marcos legales existentes para hacerlos operativos en situaciones concretas de emergencia y reconstrucción. La economía social fue nombrada no como un complemento, sino como un socio estratégico con base jurídica clara y respaldo institucional creciente.

La mesa de alcaldes puso voz al sufrimiento vivido en los municipios afectados por la DANA y visibilizó las carencias estructurales con las que se enfrentan a una reconstrucción de gran envergadura. Intervinieron Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta; Guillermo Luján, alcalde de Aldaia; y Salvador Climent, alcalde de Llombai. Junto a ellos, la secretaria general del Ayuntamiento de Catarroja, Remedios Ibáñez, ofreció una de las reflexiones jurídicas más contundentes de la jornada.

Maribel Albalat relató cómo en Paiporta, un municipio de casi 30.000 habitantes, la DANA dejó al pueblo sin servicios públicos, sin agua, sin alimentación, con comercios cerrados y con más de 2.000 personas desplazadas de plantas bajas. Señaló la falta de recursos técnicos y humanos para gestionar la emergencia, y cómo el apoyo ciudadano y del tercer sector fue crucial. Agradeció la ayuda espontánea recibida -“voluntarios con palas”, colegios profesionales, ONG- y subrayó que se ha recuperado menos del 50 % del tejido urbano y económico. “El 20 % de los comercios no iban a abrir y los que lo hacen, funcionan en precario.

Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, centró su intervención en la necesidad de reconocer institucionalmente lo que ha pasado, especialmente en torno al barranco de la Saleta, donde se produjeron seis muertes. Lamentó que muchas de las obras de prevención pendientes desde hace años no se habían ejecutado. Reclamó mayor responsabilidad compartida y coordinación entre administraciones para no normalizar la falta de inversión en seguridad hidráulica. Reivindicó que los planes municipales de emergencia deben adaptarse a realidades nuevas y más extremas: “El 29 de octubre no fue una DANA, fue un tsunami”, afirmó, señalando que las instrucciones de su plan local (alejarse de los barrancos) eran, trágicamente, lo contrario de lo que habría salvado vidas.



Salvador Climent, desde Llombai, expuso el drama de un municipio agrícola completamente incomunicado. “456 litros por metro cuadrado en pocas horas lo destruyeron todo”. Aislados durante tres días, sin suministros, vivieron una situación de colapso. Climent subrayó la falta de capacidad municipal para gestionar los fondos recibidos: aunque disponen de recursos, “tenemos la misma gente que antes” y no hay empresas locales suficientes para ejecutar las obras. El municipio sigue con caminos intransitables, campos inservibles y graves problemas de gestión del agua. Señaló además que TRAGSA ha reconocido públicamente la falta de músculo empresarial para asumir la reconstrucción rural.

La intervención más técnica de la mesa fue la de Remedios Ibáñez, secretaria general del Ayuntamiento de Catarroja, quien planteó los límites del marco jurídico-administrativo actual para actuar en contextos de emergencia. Explicó que Catarroja tiene que gestionar más de 138 millones de euros en ayudas, en contraste con un presupuesto municipal ordinario de 22 millones al año. Identificó dos grandes problemas:

1. La rigidez del sistema de contratación pública: “Aunque sigamos en emergencia, es muy poco probable que podamos encomendar una obra a dedo”, explicó, y añadió que “los mecanismos actuales no son ágiles, aunque sí garantistas”, lo que genera un efecto péndulo entre la exigencia de concurrencia y la necesidad de actuar con urgencia.

2. La falta de instrumentos para colaborar con el tercer sector: “No disponemos de un instrumento de contratación ad hoc, transparente, competitivo y

rápido; necesitamos convenios de colaboración más flexibles”, reclamó. Reconoció que el apoyo del sector cooperativo y de las entidades sociales fue clave en las primeras semanas, cuando el ayuntamiento no tenía capacidad para llegar a todo. Literalmente afirmó: “El no tener que firmar el convenio fue una gran ayuda”, en referencia a las colaboraciones informales con entidades que suplieron funciones municipales sin pasar por procedimiento administrativo.

Ibáñez subrayó también la necesidad de reformar la normativa vigente, tanto para agilizar la contratación pública como para integrar jurídicamente al tercer sector y la economía social en el marco de emergencias. Reclamó “instrumentos específicos de colaboración”, tanto para la gestión ordinaria como para escenarios extraordinarios. Su exposición evidenció la contradicción entre la normativa ordinaria (pensada para tiempos de normalidad) y la realidad de un ayuntamiento colapsado por una catástrofe climática.

### **Cooperativas, vivienda y articulación ciudadana como infraestructuras sociales de reconstrucción**

La segunda mesa técnica de la jornada puso el foco en las herramientas jurídicas y organizativas que ya existen en el ámbito de la economía social y que pueden activarse para responder a contextos de emergencia y reconstrucción, especialmente en sectores estructurales como la vivienda, la energía, los cuidados o la participación ciudadana. Intervinieron en esta mesa Vicente Duart (responsable del Registro de Coope-

rativas de la Generalitat Valenciana), Francisco Pérez Caballero (presidente de FECOVI), Montse Llorca (directora de Cohabitem), Raúl Contreras y Antonio Ariño (promotores de los CLERS), José Manuel Pastor (Catedrático de Análisis Económico) y José Pérez (CEO WOZTELL).

Vicente Duart, del Registro de Cooperativas, presentó con detalle el marco normativo valenciano para la constitución de cooperativas, recordando que estas pueden constituirse sin coste notarial, con apoyo técnico gratuito de la Generalitat y con procedimientos ágiles en línea. Destacó que las cooperativas de iniciativa social, reguladas en la Ley 8/2003 de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, especialmente tras su reforma de 2023, pueden constituirse en sectores como la vivienda, los servicios sociales, la salud, la energía o la movilidad, cuando persiguen una finalidad de interés general y no reparten beneficios.

Duart subrayó que “la ley permite que los ayuntamientos cedan derechos de superficie sobre suelo público a cooperativas de vivienda en cesión de uso”, siempre que el uso responda al interés general, y que dichas cesiones pueden formalizarse a través de concesiones demaniales o convenios, según el caso. Recordó que el artículo 99 bis, introducido por la Ley 2/2023, permite a las entidades locales establecer convenios de colaboración con cooperativas de iniciativa social fuera del marco contractual ordinario, siempre que se justifique que no procede la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Francisco Pérez Caballero, presidente de FECOVI (la federación valenciana de cooperativas de vivienda), explicó cómo el modelo de cesión de uso permite ofrecer vivienda asequible, estable y no especulativa en suelos de titularidad pública o privada, con participación activa de los usuarios. Mostró ejemplos de proyectos cooperativos en marcha en municipios pequeños y zonas rurales, y señaló que el modelo está especialmente indicado para personas mayores, jóvenes o familias vulnerables, ya que genera comunidad, reduce costes de mantenimiento y promueve formas de convivencia solidaria.

Pérez reclamó a los ayuntamientos voluntad política y visión a largo plazo: “Si quieren que haya viviendas cooperativas, deben reservar suelo y planificarlo. Sin suelo, no hay proyecto”. Señaló también la necesidad de acompañamiento técnico, formación de los grupos y acceso a financiación a través de fondos europeos, créditos blandos o colaboración público-comunitaria.

Montse Llorca, desde Cohabitem, reforzó esa idea y explicó cómo la vivienda colaborativa puede activarse en suelo dotacional siempre que el ayuntamiento reconozca el interés social del proyecto. Subrayó que,

en contextos de emergencia habitacional, como tras la DANA, los modelos cooperativos permiten dar respuesta estable sin caer en lógicas asistencialistas ni especulativas. Expuso que la vivienda cooperativa no es propiedad individual ni alquiler, sino un derecho de uso colectivo, gestionado de forma democrática y con un enfoque intergeneracional y de cuidados.

Llorca denunció las dificultades actuales: la falta de seguridad jurídica sobre las cesiones de uso, los retrasos en las tramitaciones urbanísticas y la ausencia de un circuito institucional claro para canalizar estas iniciativas desde la administración. “Hay voluntad política, pero faltan herramientas técnicas y jurídicas adaptadas”, afirmó.

Uno de los momentos más intensos de la jornada fue la intervención conjunta de Antonio Ariño, catedrático de sociología y ex vicerrector de la Universitat de València, y Raúl Contreras, economista social y promotor de iniciativas de economía transformadora. Ambos explicaron cómo surgieron y cómo funcionan los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), que ya operan en más de 15 municipios afectados por la DANA, especialmente en la comarca de l’Horta Sud.

Antonio Ariño contextualizó su aparición como una respuesta ante la ausencia de representación real de las víctimas en los espacios institucionales de reconstrucción, señalando que ni en las comisiones oficiales del Gobierno ni en los comités técnicos fueron incluidas las personas afectadas. Criticó duramente la incapacidad de las categorías tradicionales —partidos, sindicatos, ONG— para responder con agilidad y arraigo a la emergencia, y propuso entender la catástrofe como un fenómeno social, no natural:

“Esto no es un desastre natural, esto es una catástrofe social causada por modelos de ocupación del territorio profundamente desiguales”.

Ariño explicó que los CLERS han surgido desde barrios históricos como Parc Alcosa o el barri d’Orba, pero se han extendido ya a pueblos pequeños y medianos, y funcionan como espacios de autoorganización vecinal, con comisiones que van desde salud mental y vivienda, hasta proyectos de reubicación, empleo, urbanismo o cultura. Reivindicó que el objetivo no es “reconstruir lo anterior”, sino transformar el modelo existente para evitar repetir los errores que agravaron los efectos de la DANA.

Por su parte, Raúl Contreras centró su intervención en el carácter operativo de los comités. Explicó que los CLERS son estructuras horizontales, transparentes y abiertas, donde la ciudadanía toma decisiones colectivas y se invita a participar a empresas, ayuntamientos y universidades, no como entidades directivas, sino como “una más”.

“Venimos a servir, no a dirigir. La economía debe ponerse al servicio de la vida” —afirmó, reivindicando una lógica de colaboración radicalmente distinta a la delegación institucional o a la externalización convencional.

Contreras analizó también las causas estructurales de la catástrofe: la ocupación de zonas inundables por parte de viviendas y polígonos industriales, el abandono de tierras forestales aguas arriba, y la ausencia de planificación preventiva. Explicó que los CLERS han empezado a elaborar diagnósticos comunitarios, están diseñando instrumentos financieros propios para adelantar ayudas a familias sin seguro y han creado catálogos de valores sociales y ambientales para priorizar las inversiones en función del impacto, no solo del coste económico.

Ambos ponentes coincidieron en que es imprescindible que las administraciones reconozcan a los CLERS como infraestructuras sociales permanentes y no como respuestas puntuales. Propusieron incluso extender esta red a municipios no afectados, como forma anticipada de preparación comunitaria frente a futuras emergencias climáticas.

La jornada incluyó también dos intervenciones clave desde el ámbito académico y tecnológico. Por un lado, José Manuel Pastor presentó las conclusiones del comité de expertos para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. Aportó datos relevantes: el PIB no refleja adecuadamente los efectos de una catástrofe como esta, mientras que el Producto Interior Neto (PIN) permite estimar mejor la depreciación del capital ocasionada. En este caso, la pérdida se estimó en más de 16.000 millones de euros. Pastor explicó que su análisis se basó en el estudio de 72 casos internacionales y en entrevistas a responsables locales y agentes sociales. Reclamó una transformación profunda del sistema de respuesta institucional: inversión estructural, agilización administrativa, infraestructuras metropolitanas resilientes y una estrategia integral desde la economía social.

Por otro lado, José Pérez, CEO de WOZTELL y director de la Cátedra Ciudadano Conversacional de la Universitat de València, presentó la plataforma INCARE (Iniciativa Nacional de Captación de Recursos). Este sistema tecnológico, inspirado en herramientas utilizadas durante la pandemia, permite detectar, priorizar y canalizar necesidades ciudadanas en tiempo real, emparejándolas con recursos disponibles. José Pérez subrayó que no gestionan dinero, sino flujos de ayuda material y voluntaria, con el objetivo de empoderar a la comunidad local y facilitar la coordinación pública y social desde tecnologías conversacionales como WhatsApp o Telegram. INCARE ha sido testado ya en varios municipios afectados por la DANA y pro-

pone una vía innovadora para articular la reconstrucción desde la escucha y la participación.

### **Sin las fundaciones y entidades del tercer sector, la respuesta a la DANA habría sido más lenta, menos justa y menos humana**

La última mesa de la jornada reunió a actores clave de la reconstrucción desde la economía social, fundaciones y plataformas de innovación abierta. Participaron Vicent Moros (Fundació Coliséé), Ana Tórtola (Nova Fundació Feina), Mavi Leida (Fundació Novaterra), Ximo Planells (Fundació Horta Sud), Jorge Valls (Fundació València Clima i Energia) y Larissa Moura (Inneürope).

Vicent Moros, desde Coliséé, describió la actuación de su organización en la fase crítica de evacuación y atención a personas mayores, poniendo a disposición plazas residenciales y personal de apoyo. Reivindicó la necesidad de que los planes municipales de emergencia incluyan a los centros residenciales como nodos esenciales, y que exista una coordinación anticipada con el tercer sector sanitario y de cuidados.

Ana Tórtola, de Nova Feina, explicó con detalle la actuación de su entidad desde el primer momento: reparto de productos de primera necesidad, atención psicosocial, formación para la reconstrucción (cursos exprés de pintura y albañilería), creación de un banco de herramientas comunitarias y orientación laboral a personas afectadas, muchas de ellas en situación previa de exclusión. Destacó también que desde Nova Feina elaboraron un censo interno de personas usuarias afectadas -especialmente en Catarroja- para identificar sus necesidades urgentes y establecer contacto con las familias desplazadas.

Mavi Leida, de la Fundació Novaterra, explicó que su intervención en la pos-emergencia se articuló a través del proyecto AVANT, diseñado para darle la vuelta a la DANA desde el ámbito del empleo y la reconstrucción comunitaria. Se trata de una iniciativa de inserción sociolaboral financiada parcialmente por empresas y con apoyo institucional, que actúa como puente entre servicios sociales, empleo y tejido empresarial, especialmente para personas que no acceden a los canales tradicionales. AVANT combina acompañamiento emocional, orientación laboral, capacitación técnica en oficios clave. Mavi Leida subrayó que el tercer sector puede -y debe- llegar donde la administración no puede, pero con coherencia, conocimiento del territorio y capacidad de escucha.

Ximo Planells, de la Fundació Horta Sud, aportó cifras claras: en apenas un mes y medio, movilizaron más de 1,5 millones de euros hacia entidades de base, canalizados desde donaciones privadas y en colaboración con la Fundació Vicente Ferrer. Reivindicó el

modelo de fundación comunitaria con gestión transparente, sin ánimo de lucro ni retribución a patronos, y con capacidad para actuar con agilidad donde la administración tarda.

Jorge Valls, desde la Fundació València Clima i Energia, presentó la experiencia de dos comunidades energéticas locales impulsados tras la DANA, en Castellar-Oliveral y Catarroja. Detalló mecanismos como coches eléctricos compartidos, compras de energía agrupadas o ayudas para el bono térmico. Defendió la necesidad de que las fundaciones participen en la gobernanza energética local y en la planificación climática con criterios de equidad.

Larissa Moura, desde Inneürope, ofreció una perspectiva más transversal sobre innovación abierta aplicada a la reconstrucción. Defendió la importancia de tejer ecosistemas colaborativos entre administración, tercer sector y ciudadanía, y presentó herramientas de sistematización de buenas prácticas europeas en regeneración territorial.

El balance de la mesa fue unánime: sin las fundaciones y entidades del tercer sector la respuesta a la DANA habría sido más lenta, menos justa y menos humana. Ahora, el reto es dotarlas de herramientas jurídicas, reconocimiento institucional y financiación estable para que pasen de ser una red informal de apoyo a convertirse en infraestructuras cívicas permanentes.

### Reconstruir desde la economía social como obligación jurídica y una oportunidad política

La jornada concluyó con una mesa institucional y académica de cierre a cargo de Gustavo Zaragoza, codi-

rector del LongevidadLAB (una iniciativa de IUDESCOOP e Ilunion), de Tomás González Cruz, director de la Cátedra de Empresa y Humanismo, y de María José Vañó, directora de IUDESCOOP y codirectora de LongevidadLab.

Gustavo Zaragoza destacó la necesidad de que los aprendizajes surgidos en la jornada no se pierdan en la fragmentación institucional. Como codirector del LongevidadLAB, insistió en que hay que generar marcos estables de colaboración con el tercer sector y que la reconstrucción debe situar a las personas mayores en el centro, no como población pasiva sino como actores clave del territorio.

María José Vañó, por su parte, insistió en que no se trata de innovar sobre estructuras jurídicas inexistentes, sino de activar las herramientas que ya prevé el ordenamiento: convenios de colaboración con cooperativas de iniciativa social (art. 99 bis de la Ley 8/2003), reservas de contrato previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, y la figura de las fundaciones como colaboradoras de interés general. Reclamó una lectura jurídica más audaz y comprometida con el territorio, y propuso una línea de trabajo conjunta entre universidades, administración y tejido social para sistematizar modelos replicables de colaboración público-social en emergencias.

El mensaje final fue claro: reconstruir desde la economía social no es una consigna, sino una obligación jurídica y una oportunidad política. No basta con reparar daños: hay que transformar estructuras. Y para ello el marco legal ya existe, solo hay que ponerlo en marcha con decisión, colaboración y voluntad de permanencia.



## RESILIENCIA SOLIDARIA: INFORME INTEGRAL DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ANTE LA DANA 2024

Elaboración colectiva bajo la coordinación del presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social de la Comunitat Valenciana, **Luis Vañó Gisbert**

### Introducción<sup>1</sup>

Las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, representadas por la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Valenciana (PTS CV), han desempeñado un papel fundamental en la respuesta a la crisis derivada de las catastróficas inundaciones ocurridas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Estas entidades, que incluyen a organizaciones sociales y asociaciones de diversa índole, tamaño y ámbito, han movilizado recursos humanos y materiales para atender las necesidades de la población afectada, y cerca de un año después de la tragedia siguen movilizándose.

Los efectos de esta catástrofe natural impactaron de manera especial en los colectivos más vulnerables, evidenciando y agravando las desigualdades sociales existentes. Personas en situación de pobreza, exclusión social, sin hogar, población gitana, migrantes, personas mayores, niños y niñas, personas con discapacidad, y aquellos con condiciones de salud crónicas se encontraron en una situación de urgencia que requirió atención inmediata y especializada.

La pérdida de viviendas y la destrucción de infraestructuras dejó a miles de personas sin un lugar seguro donde refugiarse. Los albergues y centros de acogida no dieron abasto, y la situación se vio agravada por la escasez de recursos y las dificultades logísticas para hacer llegar la ayuda a las zonas más afectadas.

La falta de acceso a alimentos, agua potable, medicinas y otros suministros básicos generó una crisis humanitaria que exigió una respuesta coordinada y eficaz. Las interrupciones en el suministro eléctrico y la destrucción de tiendas y centros de abastecimiento limitaron la disponibilidad de productos esenciales. Además, las personas en situación de vulnerabilidad,

como aquellas con discapacidad, movilidad reducida, mayores o condiciones de salud que requieren tratamientos continuos, enfrentaron barreras adicionales para satisfacer sus necesidades esenciales.

La salud mental y el bienestar emocional de la población también se vieron gravemente afectados. El estrés, la ansiedad y el trauma derivados de la pérdida de seres queridos, hogares y medios de subsistencia necesitaron de atención psicosocial especializada. Las redes de apoyo comunitario, que en circunstancias normales ofrecen un sostén vital, sufrieron también por el impacto de la DANA.

En este contexto, la PTS CV estableció una Mesa de Colaboración en conjunto con la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana y otras entidades clave, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre las distintas organizaciones y autoridades para maximizar la eficacia de la respuesta, llegando lo más rápidamente posible a quienes más lo necesitaban.

La situación dio lugar a una crisis multidimensional, por lo que se hizo necesario un enfoque integral que considerara las diversas facetas de la emergencia: humanitaria, social, económica y sanitaria. La colaboración entre el sector público, el Tercer Sector y la sociedad en general ha sido esencial para enfrentar los desafíos que plantea la recuperación y reconstrucción post-DANA.

### Fortalecer el tejido social

La PTS CV aboga por una reconstrucción que no solo repare los daños materiales, sino que también fortalezca el tejido social y promueva la resiliencia comunitaria. La DANA ha puesto de manifiesto la importancia vital de contar con un Tercer Sector fuerte y articulado, capaz de responder con agilidad y eficacia

1.- Este texto es un resumen amplio y actualizado del Informe que con el mismo nombre realizó la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana a finales de noviembre de 2024.

a situaciones de emergencia. Sin embargo, también ha evidenciado las limitaciones y desafíos que enfrentan estas organizaciones en contextos de crisis de gran magnitud y especial gravedad. Es necesario, por tanto, reforzar el apoyo institucional y social al Tercer Sector, reconociendo su papel indispensable en la promoción del bienestar y la cohesión social.

En las siguientes secciones se resumen los efectos de la DANA en los diferentes sectores y colectivos; las acciones desarrolladas por las entidades de la PTS CV; las necesidades detectadas y las propuestas para mejorar la efectividad del trabajo realizado.

Como se verá, resulta imprescindible fortalecer la colaboración interinstitucional y promover políticas públicas que favorezcan la resiliencia y la inclusión social. Una vez se han logrado avances importantes en la reparación de infraestructuras físicas, es momento de reconstruir también el entramado social que sostiene a nuestras comunidades.

La PTS CV reitera su compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de todas las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, y hace un llamado a la sociedad en su conjunto para trabajar juntos en la construcción de un futuro más justo y resiliente.

### Actuaciones de EAPN CV

La DANA que asoló la provincia de Valencia ha sido comparada con un "tsunami" por su devastador impacto, atribuido al cambio climático. Afectó a más de 70 municipios y un millón de personas, causando muertes, destrucción, problemas de salud pública y daños ambientales y en infraestructuras clave. Los propios miembros de la Junta Directiva de EAPN CV fueron directamente víctimas de la catástrofe, al residir en municipios como Catarroja, Algemesí, Torrent, Picanya y Alfafar.

Para EAPN una de las prioridades es y será la vivienda. Según el análisis de DATADISTA y el sistema Copernicus EMS, más de 75.000 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones.

Preocupa que las ayudas se estén generando principalmente para propietarios, sin tener en cuenta a personas que vivían en chabolas, infraviviendas, en régimen de alquiler, en situación de sinhogarismo, sin empadronamiento o en situación administrativa irregular.

También inquieta el incremento del discurso de odio contra realidades sociales específicas. La extensión del racismo, el antigitanismo y otras formas de xenofobia ha resultado en hechos discriminatorios, como la falta de voluntariado en el barrio del Raval en Algemesí o la criminalización de colectivos sociales en redes sociales.

Las entidades del tercer sector han sido objeto de la desinformación y el odio, lo que requiere una respuesta seria y coordinada. Tampoco ayuda la frustración generada por la gestión del caos y la polarización política.

Desde el inicio de la emergencia, EAPN CV implementó diversas líneas de actuación para atender las necesidades emergentes. Entre ellas destaca la creación de una Web Específica, 'ayudaenlaDANA' para canalizar y agrupar las ayudas y formas de colaboración y voluntariado.

EAPN CV ha demostrado una respuesta integral y comprometida ante la crisis provocada. A través de la coordinación efectiva, movilización de voluntarios, gestión de recursos y atención personalizada, ha logrado mitigar el impacto en las personas más vulnerables y en las propias entidades afectadas.

Entre las soluciones aplicadas destaca la atención psicosocial remota y la creación de brigadas móviles, equipos que se desplazaron a los municipios afectados para atender tanto a personas como a otros equipos técnicos y comunidad en general.

También se ha ofrecido apoyo en la gestión de ayudas sociales, esenciales para personas con barreras comunicativas, tecnológicas o de acceso a dispositivos electrónicos.

Todas las entidades de EAPN CV han ofrecido apoyo y acompañamiento integral, cubriendo necesidades básicas y complejas, especialmente para colectivos más vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de sinhogarismo, migrantes en situación irregular, personas mayores o con discapacidad.

Casi un año después de la tragedia se mantiene la Emergencia Habitacional. Faltan viviendas, hay limitaciones de accesibilidad para personas con discapacidad y se hace necesario un control del precio de los alquileres para evitar precios abusivos.

Para EAPN CV es esencial reconocer la importancia de las necesidades específicas de los colectivos más vulnerables y que se implementen medidas que aseguren su bienestar e inclusión plena en la sociedad. La solidaridad y el compromiso conjunto serán fundamentales para superar los retos actuales y futuros.

### Actuaciones de la ONCE CV

La ONCE Comunidad Valenciana llevó a cabo un exhaustivo análisis de las necesidades y afectaciones en las personas con discapacidad visual tras la DANA del 29 de octubre. El desastre natural tuvo un impacto significativo en la propia comunidad de la ONCE, afectando no solo a personas afiliadas sino también a sus trabajadores, estudiantes y al funcionamiento de sus servicios.



*Reunión el pasado mes de marzo en Valencia de la Plataforma del Tercer Sector con los Reyes para hacer seguimiento de la respuesta de las entidades sociales ante la DANA.*

En la zona más afectada por la DANA residen 954 personas afiliadas a la ONCE. En los días siguientes a las inundaciones se logró contactar con 720 de ellas. De estas, 14 necesitaron asistencia urgente y 15 no urgente. Lamentablemente, se registró el fallecimiento de un trabajador de Ilunion, empresa perteneciente al Grupo Social ONCE. También se reportó el fallecimiento de una persona afiliada y su esposa, quien también tenía discapacidad.

Más de 300 agentes vendedores presentaron incidencias significativas que les impidió desempeñar su trabajo. Aproximadamente 200 de ellos tuvieron que dejar temporalmente sus tareas. Los equipos de la Red de Ventas trabajaron en la reubicación de estos trabajadores para minimizar el impacto en sus ingresos y asegurar la continuidad del servicio.

La ONCE habilitó rápidamente un sistema de comunicación para mantener el contacto y brindar apoyo a las personas afiliadas y estudiantes afectados. Ofreció asistencia urgente y no urgente según las necesidades individuales, asegurando que todos recibieran la atención necesaria.

Se proporcionó apoyo psicológico a las familias y compañeros afectados por las pérdidas humanas y materiales, ofreciendo acompañamiento emocional en los momentos más difíciles.

También se buscaron soluciones para minimizar las pérdidas económicas de los trabajadores y garantizar la continuidad del servicio. El Grupo Social ONCE abrió una cuenta bancaria para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos derivados de los efectos negativos de la DANA en personas afiliadas, trabajadores y su entorno más cercano.

La colaboración con autoridades, otras entidades del CERMI CV y la sociedad en general está siendo crucial para superar esta crisis y garantizar que las personas con discapacidad visual recuperen su calidad de vida y autonomía.

Para la ONCE esta tragedia subraya la importancia de implementar medidas específicas para las personas con discapacidad visual en los planes de emergencia y respuesta ante desastres naturales, asegurando que sus necesidades particulares sean consideradas y atendidas adecuadamente.

### **Actuaciones de Cáritas CV**

Ante la dramática situación provocada por la DANA, Cáritas Comunidad Valenciana activó sus protocolos de emergencia para atender a los damnificados por esta tragedia. La organización recibió un aluvión de propuestas de ayuda de empresas, entidades y particulares de toda España, demostrando una vez más su solidaridad en momentos de crisis.

Cáritas CV creó un Comité de Emergencia siguiendo el protocolo de Cáritas Española, centrando sus esfuerzos en la comunicación, organización y gestión de los recursos disponibles.

En una primera fase, Cáritas CV se concentró en la creación de este comité y en la toma de decisiones rápidas y efectivas en la gestión de la emergencia. Acompañó a las Cáritas Parroquiales de las poblaciones afectadas a través del refuerzo técnico de Cáritas Diocesana de Valencia en las zonas más afectadas (Algemés, Paiporta, La Torre, Catarroja, Chiva y Utiel).

Cáritas recibió numerosas propuestas de ayuda de empresas, entidades y particulares, y gestionó la

concesión de ayudas individuales para familias afectadas. Se priorizó la atención y el acompañamiento de personas en situación de mayor vulnerabilidad, como mayores, familias en riesgo, personas sin hogar y habitantes de infraviviendas.

Y se habilitaron cuentas bancarias específicas para recibir donaciones destinadas a la emergencia de la DANA, incluyendo opciones de donación a través de Bizum. Paralelamente a la respuesta de necesidades urgentes, Cáritas CV puso en marcha el plan de acción a corto y medio plazo para la atención de las personas y familias afectadas por la DANA, consciente de que el impacto de esta catástrofe será a largo plazo para muchas de ellas.

La experiencia demuestra que la coordinación y la planificación son esenciales para afrontar situaciones de esta magnitud. Por ello, para Cáritas es necesario continuar trabajando en colaboración con empresas, entidades, particulares y autoridades para maximizar el impacto positivo de las acciones emprendidas.

La solidaridad y el compromiso de todos serán fundamentales para superar los desafíos actuales y futuros, garantizando que las personas afectadas puedan reconstruir sus vidas y recuperar su bienestar.

### Actuaciones de la Plataforma del Voluntariado CV

La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV) ha desempeñado un papel crucial en la coordinación y movilización de voluntarios tras la DANA. Desde el primer momento, la PVCV ha trabajado incansablemente para canalizar la solidaridad de miles de personas dispuestas a ayudar en las tareas de recuperación y asistencia a las poblaciones afectadas.

Desde el sábado posterior a la DANA se enviaron 12.300 voluntarios a las zonas afectadas. Las acciones se concentraron en 22 municipios de las comarcas de L'Horta Sud, Plana de Utiel-Requena y La Ribera. Se utilizaron 137 autobuses para el transporte de los voluntarios a las distintas localidades.

Los voluntarios participaron en la limpieza de calles: retiro de escombros, barro y residuos para restablecer la circulación y evitar riesgos sanitarios, en el reparto y entrega de alimentos, en la entrega de medicinas en centros de mayores, en la ayuda en la descarga y distribución de materiales y donaciones recibidas.

Además del dispositivo principal, la PVCV coordinó y recibió notificaciones de acciones realizadas por diversas organizaciones y grupos de voluntariado:

- Voluntarios de la Mar
- APNADAH (Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e Hiperactividad)
- Juntos por la Vida

- Voluntariado Ford
- ASLEUVAL (Asociación para la Lucha Contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana)
- Scouts
- Voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
- Ilewasi
- Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer)
- Plataforma del Voluntariado de España: Coordinación a nivel nacional.
- Plataformas Autonómicas: Difusión y apoyo desde otras comunidades.

Las acciones realizadas por los voluntarios han tenido un impacto significativo en las comunidades afectadas. Ha permitido el restablecimiento de servicios básicos. La limpieza y despeje de vías públicas ha posibilitado el acceso de todo tipo de servicios y la reanudación del transporte. La presencia de voluntarios, además, ha fortalecido el ánimo de las comunidades, fomentando la solidaridad y el apoyo mutuo.

La solidaridad y el compromiso de miles de voluntarios han sido fundamentales para apoyar a las comunidades afectadas y comenzar las labores de recuperación. Sin embargo, los desafíos persisten y es necesario continuar trabajando en la mejora de la coordinación de las ayudas, la comunicación y la seguridad de cara a futuros eventos de este tipo.

La PVCV reitera su compromiso de seguir apoyando y coordinando las acciones de voluntariado en este y cualquier momento en que sea necesario, reconociendo el valor incalculable que aporta la sociedad civil en momentos de crisis. La unión de esfuerzos y la solidaridad colectiva serán determinantes para superar los retos actuales y futuros.

### Actuaciones del CERMI CV

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) es la plataforma que agrupa y representa a las principales organizaciones de personas con discapacidad y sus familias en la región. Su misión es defender los derechos y promover la inclusión plena de este colectivo en todos los ámbitos.

Tras el devastador paso de la DANA por la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, el CERMI CV elaboró un informe que revela que 1.625 personas con discapacidad se vieron directamente afectadas por las inundaciones y sus consecuencias.

El desastre natural ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades específicas que enfrentan las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Las inundaciones no solo han exacerbado las dificultades

existentes, sino que también han generado nuevos desafíos que requieren respuestas coordinadas y adaptadas a las necesidades particulares de este colectivo.

La DANA ha evidenciado que las personas con discapacidad se encuentran en una posición de desventaja agravada en contextos de crisis y tragedias naturales. La pérdida de dispositivos de asistencia personal, la interrupción de tratamientos médicos esenciales y las barreras en la comunicación y movilidad han comprometido su autonomía, salud y bienestar.

Además, las entidades del tercer sector de la discapacidad, que actúan como soporte fundamental para este colectivo, sufrieron daños en sus instalaciones y recursos, limitando su capacidad de respuesta en un momento crítico.

El CERMI CV ha realizado solicitudes urgentes para abordar necesidades específicas no cubiertas. Entre ellas se ha solicitado al Consorcio de Compensación de Seguros que incluya en sus indemnizaciones el coste de las adaptaciones de los vehículos destruidos por las inundaciones.

Estas adaptaciones, vitales para la movilidad de las personas con discapacidad, no están consideradas en las tablas indemnizatorias del Consorcio, lo que significa que el sobrecoste, que puede superar el 30% del valor del vehículo, no es compensado. Esta situación supone un perjuicio añadido, limitando gravemente la autonomía y calidad de vida de las personas afectadas.

Asimismo, CERMI CV destaca la importancia de desarrollar protocolos de emergencia inclusivos y específicos para las personas con discapacidad. Es imperativo diseñar y establecer planes de actuación que contemplen sus necesidades particulares en situaciones de emergencia. Esto implica una formación especializada, una coordinación interinstitucional efectiva y la participación activa de las entidades representativas del colectivo en la planificación y ejecución de las respuestas.

Las personas con discapacidad enfrentan una vulnerabilidad incrementada debido a diversos factores. Entre ellos la pérdida de dispositivos de asistencia personal: sillas de ruedas, audífonos, prótesis y otros equipos esenciales han sido dañados o destruidos, comprometiendo su autonomía y movilidad; la falta de acceso a medicación esencial y tratamientos médicos especializados, poniendo en riesgo su salud y bienestar; dificultades en las comunicaciones y acceso a información actualizada y accesible, especialmente para personas con discapacidades sensoriales, incrementando el aislamiento y la ansiedad, y múltiples barreras en movilidad y acceso a servicios.

Desde CERMI CV se conformó una Mesa de Colaboración junto con la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valenciana (PTS CV) y la Consejería de

Servicios Sociales, con el objetivo de establecer una vía de comunicación directa, centralizar y supervisar las ayudas y necesidades, evitando duplicidades y asegurando que la asistencia llegue a quienes más lo necesitan, y coordinar acciones y optimizar recursos, maximizando la eficacia de la respuesta.

Por su parte, las entidades miembros del CERMI CV han desplegado esfuerzos significativos para atender las necesidades emergentes tras la DANA. La solidaridad y el compromiso conjunto entre entidades, autoridades y sociedad civil son fundamentales para superar los retos actuales y futuros, garantizando el bienestar y la inclusión plena de las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana.

Para el CERMI CV es fundamental que las lecciones aprendidas de esta emergencia impulsen a construir una sociedad más inclusiva, resiliente y solidaria, donde las personas con discapacidad sean consideradas en todas las etapas de planificación y respuesta ante desastres.

### Actuaciones de Cruz Roja CV

Cruz Roja desplegó una amplia operación de asistencia para atender las necesidades de la población afectada, movilizando recursos humanos y materiales significativos. El total de asistencias realizadas fue de 207.069, y los recursos humanos movilizadas fueron de 4.692 voluntarios y personal especializado.

Tras las inundaciones, Cruz Roja habilitó albergues para ofrecer refugio seguro y condiciones básicas de habitabilidad a las personas desplazadas por la DANA. Fueron 10 los albergues establecidos en 8 ubicaciones diferentes en la provincia de Valencia, para un total de 3.660 plazas.

Se implementaron 20 puntos de distribución para entregar alimentos, kits de higiene y otros suministros esenciales tanto a las personas afectadas como a los equipos de respuesta.

Un total de 160 equipos especializados fueron desplegados para atender las diversas necesidades surgidas a raíz de la emergencia. 14 equipos de Asistencia Sanitaria proporcionaron atención médica y primeros auxilios, 28 equipos de Albergue y Alojamiento gestionaron los albergues y coordinaron el alojamiento de las personas desplazadas, 8 equipos psicosociales brindaron apoyo emocional y psicológico a los afectados, 4 equipos de búsqueda participaron en operaciones de búsqueda y rescate, 90 equipos de intervención en Emergencias realizaron diversas tareas de respuesta inmediata, y 8 equipos de comunicaciones aseguraron las conexiones entre los diferentes equipos y coordinadores.

Para apoyar las operaciones de respuesta y garantizar la logística necesaria, Cruz Roja movilizó diversos

recursos materiales y vehículos. Entre ellos 8 camiones, 6 furgonetas, 18 ambulancias, más de 100 unidades logísticas -que incluyen distintos vehículos y dispositivos- y 13 carpas.

La intervención de Cruz Roja en la provincia de Valencia durante la emergencia de la DANA fue integral y efectiva, atendiendo a las necesidades más urgentes de la población afectada. La rápida respuesta y la amplia movilización de recursos reflejan el compromiso de Cruz Roja con la protección y el bienestar de las comunidades en situaciones de crisis.

La coordinación efectiva, la dedicación de los voluntarios y personal, y la capacidad logística demostrada fueron clave para mitigar el impacto de la DANA y apoyar la recuperación de las áreas afectadas. Este despliegue resalta la importancia de contar con organizaciones preparadas y recursos adecuados para hacer frente a emergencias naturales y proteger a las poblaciones más vulnerables.

### **El Tercer Sector, pilar indispensable de la respuesta social**

La DANA que golpeó a la Comunitat Valenciana no fue simplemente una tormenta; fue una prueba contundente de nuestras vulnerabilidades como sociedad y una llamada urgente a la acción colectiva. Este desastre natural, sin precedentes en nuestra región, desnudó las fragilidades estructurales, económicas y sociales que subyacen en nuestro día a día.

Los informes presentados por las diversas entidades del Tercer Sector de Acción Social de la Comunitat Valenciana —EAPN CV, ONCE CV, Cáritas CV, Plataforma del Voluntariado CV, CERMI CV y Cruz Roja CV— no solo documentan los estragos inmediatos de la catástrofe, sino que también iluminan el compromiso de una sociedad civil masiva, empática, concienciada y dispuesta a dejarse la piel por los que más lo necesitan.

La magnitud de la DANA se refleja en cifras abrumadoras: 219 personas fallecidas en la Comunitat Valenciana, 75 municipios afectados, un millón de personas impactadas, infraestructuras vitales destruidas y servicios esenciales interrumpidos.

Sin embargo, más allá de los daños físicos, la DANA amenaza con profundizar las desigualdades existentes y marginar aún más a los colectivos vulnerables. En este panorama, el Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Valenciana (PTS CV) ha emergido como pilar indispensable de la respuesta social. Las organizaciones han actuado con celeridad y eficacia, ofreciendo no solo asistencia inmediata sino también un acompañamiento integral a largo plazo.

EAPN CV ha destacado en la coordinación de esfuerzos, estableciendo canales de comunicación efectivos

y adaptando sus programas para atender las necesidades emergentes. Su énfasis en apoyar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad —aquellas sin hogar, migrantes en situación irregular y víctimas de violencia de género, pueblo gitano... demuestra un compromiso inquebrantable con la justicia social.

ONCE CV ha enfrentado desafíos titánicos al brindar apoyo a sus afiliados y trabajadores afectados. La pérdida de vidas y medios de subsistencia entre personas con discapacidad visual subraya la urgencia de garantizar accesibilidad y soporte especializado en situaciones de emergencia.

CARITAS CV ha movilizado recursos y voluntades a nivel nacional, gestionando de manera eficiente las donaciones y asegurando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. Su enfoque en la dignidad humana y el acompañamiento emocional resalta la importancia de abordar las dimensiones psicológicas y espirituales del desastre.

PLATAFORMA VOLUNTARIADO CV ha canalizado la solidaridad de más de 12.300 voluntarios, demostrando que la participación ciudadana es esencial para la reconstrucción comunitaria. Sus acciones en limpieza, distribución de alimentos y apoyo a personas mayores han sido vitales para restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

CERMI CV ha puesto de relieve las necesidades específicas de las personas con discapacidad y sus familias, quienes han enfrentado barreras adicionales en movilidad, comunicación y acceso a servicios esenciales. Su labor en la reposición de equipamiento ortoprotésico y material de apoyo y movilidad, apoyo psicológico y solucionando problemas de accesibilidad es crucial para restaurar la autonomía y el bienestar de este colectivo.

CRUZ ROJA CV ha desplegado una operación de asistencia masiva, brindando refugio, atención médica y apoyo psicosocial a miles de personas. Su capacidad logística y experiencia en gestión de emergencias han sido determinantes para mitigar el impacto de la DANA.

### **Desafíos sistémicos que exigen respuestas transformadoras**

La DANA ha expuesto con crudeza las fallas sistémicas que requieren soluciones estructurales y audaces. La magnitud de este desastre supera las capacidades de cualquier sector aislado. El Estado, en sus ámbitos estatal, autonómico y local tiene la responsabilidad indelegable de proteger a sus ciudadanos y garantizar sus derechos fundamentales.

En este sentido, la experiencia de la DANA subraya la necesidad de protocolos inclusivos de emergencias, que anticipen impactos y aseguren la protección de

los más vulnerables. La implementación de un voluntariado de emergencias es una inversión esencial para futuros desastres, permitiendo contar con una red de personas capacitadas y dispuestas a actuar rápidamente en situaciones de crisis. Estos voluntarios, apoyados por programas de formación continua, fortalecerán la capacidad de respuesta inmediata y la resiliencia de nuestras comunidades.

Asimismo, estos protocolos deben incluir la participación activa de las entidades del tercer sector, para optimizar respuestas y fortalecer la resiliencia comunitaria.

Es indispensable destinar fondos suficientes y oportunos para la recuperación y el fortalecimiento del Tercer Sector, reconociendo su papel crucial en la cohesión social y la atención a los más necesitados. La asignación de fondos de emergencia es vital para consolidar las capacidades del sector en caso de urgencia.

Este respaldo no solo refuerza la operatividad y coordinación de las entidades, sino que también solidifica la cohesión intersectorial, maximizando el impacto de cada acción hacia las personas en situación de mayor vulnerabilidad, en la reconstrucción social y económica, y asegura la sostenibilidad del despliegue de actuaciones.

Inseparablemente de ello, la gestión de la crisis y la reconstrucción debe caracterizarse por la transparencia en el uso de recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. La confianza pública es un activo invaluable que debe ser cultivado y protegido.

### **Una encrucijada: recuperación superficial o transformación profunda**

La DANA, en toda su devastación, presenta una encrucijada: podemos optar por una recuperación superficial que nos devuelva a la normalidad previa, o podemos aprovechar este momento para impulsar transformaciones profundas que construyan una sociedad más justa, equitativa y resiliente.

La DANA ha sido un golpe devastador, pero también una llamada ineludible a la reflexión y a la acción. En nuestra opinión, no podemos regresar a la "normalidad" que permitió que esta catástrofe tuviera efectos tan dramáticos. Al contrario, debemos aspirar a más, a una sociedad que priorice el bienestar colectivo, que valore y proteja a sus miembros más vulnerables, y que actúe con responsabilidad hacia el medio ambiente. Este es el momento de demostrar que somos capaces de aprender de la adversidad y transformar el dolor en progreso.

La Comunitat Valenciana tiene la oportunidad histórica de liderar un modelo de recuperación que sea ejemplo para otras regiones, basado en la equidad, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

La reciente DANA ha revelado una realidad profunda y preocupante que trasciende los daños materiales visibles: el significativo impacto humano, social y emocional en las personas en situación de vulnerabilidad y sus familias.

Es por ellos que la recuperación no debe limitarse a la reconstrucción de infraestructuras o la reposición de equipos. Es imperativo que este proceso sea inclusivo y sensible a las necesidades específicas de todas las personas en situación de vulnerabilidad.

Cada centro reabierto, cada servicio recuperado y cada programa de apoyo reactivado debe concebirse como un paso hacia un sistema más resiliente y accesible para todos. Esta crisis debe convertirse en un catalizador para reforzar el tejido social y las políticas públicas que aseguren la plena participación e inclusión de todas las personas, independientemente de sus circunstancias.

A nivel institucional se requiere un compromiso firme de las autoridades para implementar estrategias coordinadas y sostenidas que aborden la creación de redes de apoyo robustas, la inversión en programas de salud mental y la adopción de medidas que permitan una mayor autonomía y calidad de vida para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, la solidaridad de la sociedad ha sido un faro de esperanza en medio de la adversidad. La movilización de voluntarios, el compromiso de entidades del Tercer Sector y la colaboración entre comunidades demuestran que cuando actuamos juntos es posible mitigar incluso los efectos de las crisis más severas.

Este esfuerzo colectivo debe consolidarse y transformarse en un modelo de colaboración que trascienda las emergencias y se integre en la planificación y ejecución de políticas inclusivas.

### **No olvidar la lección**

Finalmente, es crucial no olvidar las lecciones aprendidas. La vulnerabilidad que ha quedado al descubierto no debe ser ignorada una vez que las aguas han retrocedido y la emergencia inmediata ha pasado.

Debemos avanzar hacia un futuro en el que las personas en situación de vulnerabilidad, sus familias y las entidades sociales que las representan no sean las más afectadas por las crisis, sino un ejemplo de cómo una sociedad preparada, inclusiva y solidaria puede proteger a todos sus miembros.

Es el momento de actuar con determinación, empatía y visión a largo plazo, para que nadie quede atrás.